

RV: C36852 RV: Respuesta Vinculada EMCALI EICE ESP - Rad. 76001-33-33-010-2020-00322-00

Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 6/07/2021 4:19 PM

Para: Juzgado 10 Administrativo - Valle Del Cauca - Cali <adm10cali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Control Trámite Correos Oficina Apoyo Juzg. Administrativos Cali <of03admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

7 archivos adjuntos (1 MB)
4. Tarjeta Profesional de Abogado.pdf; 5. Llamamiento en Garantía.pdf; 6. Póliza RCE Allianz.pdf; 2. Poder para Actuar.pdf; 3. Cédula de Ciudadanía Abogado.pdf; 7. Envío de poder.pdf; 1. Contestación de Demanda.pdf;

Cordial saludo,

Anexo constancia de radicación de documento allegado de manera digital.

Por favor no responda a este correo, este email solamente es para dar respuesta a radicación de correspondencia. Comuníquese con nosotros al email of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

No. Proceso: 76001 - 33 - 33 - 010 - 2020 - 00322 - 00

Buscar Proceso

> CALI (VALLE)> Juzgado Administrativo> Administrativo Oralidad

Informacion Principal

Sujetos

Secretaria

Despacho

Finalizacion

Demandante

SANDRA PATRICIA ESPINOSA MOSQUERA Y C

Cédula:

29114826

Demandado

MUNICIPIO DE CALI-ASEGURADORA SOLIDARI

Cédula:

MDCAS3894

Area:

0001

> Administrativo

Tipo de Proceso:

0001

> Ordinario

Fecha:

18/12/2020

Clase de Proceso:

0003

> ACCION DE REPARACION

Ubicación:

Correspondencia OF AM

Subclase:

0000

> Sin Subclase de Proceso

En:

0001

> Primera Instancia

Tipo de Recurso:

3002

> Apelación de Sentencias

No Ver Proceso:

☐

Blanquear todo

Despacho

10JUZGADO 10 ADMINISTRATIVO ORAL DE CALI

Actuación Desarrollo

Actuación a Registrar

06/07/2021

Registrado en

Folios:

Correspondencia Of Apoyo

Fecha Actuación:

06/07/2021

(dd/mm/aaaa)

Cuadernos:

Término

☒ Sin Término

☐ Término Legal

☐ Término Judicial

Calendario

☐ Ordinario

☐ Judicial

☐ Tiene Término

Días:

0

Inicial:

/ /

(dd/mm/aaaa)

Final:

/ /

(dd/mm/aaaa)

Anotación:

C36852: martes, 6 de julio de 2021 15:43: Contestación de demanda de la parte vinculada.-7 ARCHIVOS-JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA-AMP

Ubicación:

0046

> Correspondencia OF AM

Aceptar


Cerrar

Atentamente,

ANDRES MAURICIO PAQUE CARDENAS
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca.



De: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 6 de julio de 2021 15:47
Para: Andrés Mauricio Paque Cárdenas <apaquec@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: C36852 RV: Respuesta Vinculada EMCALI EICE ESP - Rad. 76001-33-33-010-2020-00322-00

DHORA STELLA RAMÍREZ
Oficina de Apoyo Juzgados Administrativos de Cali
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Cali-Valle del Cauca


De: Jose Ramiro Sandoval Mosquera <jrsandoval@emcali.com.co>
Enviado: martes, 6 de julio de 2021 15:43
Para: Oficina 02 Apoyo Juzgados Administrativos - Seccional Cali <of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: notificacionesjudiciales@allianz.co <notificacionesjudiciales@allianz.co>
Asunto: Respuesta Vinculada EMCALI EICE ESP - Rad. 76001-33-33-010-2020-00322-00

Doctora:
PAOLA ANDREA BEJARANO VERGARA
Juez Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali.
of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Santiago De Cali
E.S.D.

Referencia: Contestación de demanda de la parte vinculada.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
RADICADO: 76001-33-33-010-2020-00322-00.
DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA MOSQUERA ESPINOSA Y OTROS.
DEMANDADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.
VINCULADO: EMCALI EICE ESP.

Atentamente,



JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA
Abogado Contratista
Área Funcional de Defensa Jurídica
Celular/WhatsApp: 3106178187
Correo: jrsandoval@emcali.com.co

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórrelo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.



Doctrina: - ESP

PAOLA ANDREA BEJARANO VERGARA

Juez Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali.

Santiago De Cali

E.S.D.

PROCESO: REPARACIÓN DIRECTA

RADICADO: 76001-33-33-010-2020-00322-00.

DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA MOSQUERA ESPINOSA Y OTROS.

DEMANDADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

VINCULADO: EMCALI EICE ESP.

CARLOS OLMEDO ARIAS REY, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.489.210 expedida en Cali, en condición de Secretario General y en calidad de apoderado general de EMCALI EICE ESP, conforme Escritura Pública No. 0896 de fecha 07 de julio de 2020, de la Notaria Doce de Cali, suscrita por **JUAN DIEGO FLÓREZ GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 16.929.500 de Cali, en su condición de Gerente General EMCALI EICE ESP, conforme el Decreto No 4112.010.20.1207 del 17 de junio de 2020, expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali, posesionado mediante Acta No. 0377 del 19 de junio de 2020; manifiesto a usted, que confiero poder especial, amplio y suficiente al abogado **JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA**, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.061.762.124 expedida en Popayán (Cauca), abogado titulado con Tarjeta Profesional N° 275102 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de EMCALI EICE-ESP, actúe dentro del proceso anotado en la referencia, con la facultad expresa de efectuar toda actuación y trámite tendiente a la defensa de los intereses de la entidad.

El apoderado de EMCALI EICE ESP, además de las facultades expresamente consagradas en el artículo 77 del C.G.P., queda ampliamente habilitada para contestar la demanda, sustituir y reasumir poder, presentar peticiones, promover la tacha de falsedad, conciliar conforme a las directrices que reciba del Comité de Conciliaciones de EMCALI EICE ESP y realizar todas las demás acciones inherentes al presente mandato y concordantes con el ejercicio del derecho de defensa.

Sírvase aceptar este mandato especial y reconocerle personería dentro de los términos y para los efectos del presente poder.

Del Honorable Juez,

Acepto,

CARLOS OLMEDO ARIAS REY
Secretario General EMCALI EICE ESP

José Ramiro Sandoval Mosquera

JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA
C.C. No. 1.061.762.124 de Popayán (Cauca).
T. P. No. 275102 del C.S. de la J.
Correo: notificaciones@emcali.com.co

Área Funcional de Defensa Jurídica, correo
institucional: notificaciones@emcali.com.co
Teléfonos: 899 3317 – 899 3017

RE: PODERES PARA TRÁMITE

Carlos Olmedo Arias Rey <coarias@emcali.com.co>

Vie 06/18/2021 05:14 PM

Para: Diana Marcela Contreras Rojas <dmcontreras@emcali.com.co>; Jose Ramiro Sandoval Mosquera <jrsandoval@emcali.com.co>

CC: Laura Camila Hernandez Neira <lchernandez@emcali.com.co>; Katerin Gisella Silva Arroyo <kgsilva@emcali.com.co>

 9 archivos adjuntos (697 KB)

20210618171037165.pdf; 20210618171026609.pdf; 20210618171010314.pdf; 20210618171001970.pdf;
20210618171143248.pdf; 20210618171111671.pdf; 20210618171103093.pdf; 20210618171054620.pdf;
20210618171046152.pdf;

Cordial saludo

Conforme las Directrices del Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 2020, con ocasión a la pandemia generada por el COVID 19; remito poder amplio y suficiente para que en nombre y representación de EMCALI EICE-ESP, actúe dentro del proceso anotado en la referencia y anexo al presente, con la facultad expresa de efectuar toda actuación y trámite tendiente a la defensa de los intereses de la entidad.

Atentamente,

CARLOS OLMEDO ARIAS REY
Secretario General de EMCALI

De: Diana Marcela Contreras Rojas <dmcontreras@emcali.com.co>

Enviado: viernes, 18 de junio de 2021 8:09

Para: Carlos Olmedo Arias Rey <coarias@emcali.com.co>

Cc: Laura Camila Hernandez Neira <lchernandez@emcali.com.co>; Jose Ramiro Sandoval Mosquera <jrsandoval@emcali.com.co>

Asunto: RV: PODERES PARA TRÁMITE

Cordial Saludo, Doctor Carlos

Envío los poderes que se allegan con el presente, para el respectivo trámite en tanto se requieren para ejercer la representación judicial de la entidad

Mil gracias, respetuosamente

DIANA CONTRERAS

De: Jose Ramiro Sandoval Mosquera [jrsandoval@emcali.com.co]

Enviado: jueves, 17 de junio de 2021 10:01 p.m.

Para: Diana Marcela Contreras Rojas; Martha Yulieth Martinez Cardenas

Asunto: PODERES PARA TRÁMITE

Doctora Diana, atento saludo.

Cordial y respetuoso saludo.

Remito poderes para tramitar la firma del Dr. Carlos Olmedo Arias Rey. Muy respetuosamente solicito que se tenga prioridad para los número 1, 5,6, 8 y 9 que son los que se requieren en las respuestas y audiencias de las semanas siguientes.

Muchas gracias.

Atentamente,



JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA
Abogado Contratista
Área Funcional de Defensa Jurídica
Celular/WhatsApp: 3106178187
Correo: jrsandoval@emcali.com.co

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórralo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórralo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.

Por favor no imprima este mensaje si no es necesario. Proteger el medio ambiente es responsabilidad de todos. Este mensaje y cualquier archivo anexo contienen información privilegiada y confidencial de EMCALI EICE ESP, en

consecuencia, el que ilícitamente lo use antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones establecidas en la Ley. El uso del mensaje solo está permitido de manera exclusiva e individual para su destinatario. Si usted no es el destinatario de este correo, por favor bórrelo inmediatamente y comuníquelo al remitente. EMCALI EICE ESP no se hace responsable de información, opiniones o criterios personales que el usuario transmita mediante el correo corporativo.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.061.762.124**
SANDOVAL MOSQUERA

APELLIDOS
JOSE RAMIRO

NOMBRES

José R. Sandoval
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **10-SEP-1993**

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA



A+
G.S. RH

M
SEXO

12-SEP-2011 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sanchez Torres*

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1100100-00455175-M-1061762124-20130814 0034356527A 1 7752469446

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



Consejo Superior
de la Judicatura



UNIVERSIDAD

DEL CAUCA

CEDULA

1061762124

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:

JOSE RAMIRO

APELLIDOS:

SANDOVAL MOSQUERA

José Ramiro S. Mo.

FECHA DE GRADO

10/06/2016

FECHA DE EXPEDICION

07/09/2016

PRESIDENTE CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA

GLORIA STELLA LÓPEZ JARAMILLO

CONSEJO SECCIONAL

BOGOTA

TARJETA N°

275102

Doctora:

PAOLA ANDREA BEJARANO VERGARA

Juez Décimo Administrativo de Oralidad del Circuito de Cali.

of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Santiago De Cali

E.S.D.

Referencia: Contestación de demanda de la parte vinculada.

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

RADICADO: 76001-33-33-010-2020-00322-00.

DEMANDANTE: SANDRA PATRICIA MOSQUERA ESPINOSA Y OTROS.

DEMANDADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

VINCULADO: EMCALI EICE ESP.

JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA, mayor de edad vecino de Santiago de Cali (Valle del Cauca), identificado con cédula de ciudadanía No. 1.061.762.124 expedida en Popayán (Cauca), abogado portador de la tarjeta profesional No. 275.102 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado judicial de EMCALI EICE ESP, conforme al poder que se me ha conferido, encontrándome dentro del término y oportunidad procesal para hacerlo, contesto el medio de control de la referencia, de la siguiente manera:

I. FRENTE A LOS HECHOS:

PRIMERO: No me consta, por cuanto no se prueba la existencia de una tapa de alcantarilla en condiciones de sobre nivel de la calle que le haya provocado lesiones a la demandante, y tampoco se prueban las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que presuntamente ocurrió el hecho. Es que recordar que, corresponde a la demandante cumplir con la carga probatoria que exige el artículo 167 del Código General del Proceso, en aplicación por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

SEGUNDO: No me consta, pues de acuerdo al hecho anterior, no se aporta al proceso prueba alguna que corrobore la existencia de una tapa de alcantarilla en sobre nivel respecto a la calle, la existencia de obstáculos y tampoco la falta de señalización de la vía. Tampoco se acredita que la alcantarilla y la señalización de la vía correspondiera a una obligación de mi representada.

TERCERO: No me consta, puesto que, de acuerdo con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito (IPAT) No. A000804964, que es aportado como prueba del proceso, efectivamente el agente de tránsito Carlos Arévalo -quién no presenció los hechos sino que acudió posteriormente y diligenció el IPAT conforme a la información de terceros- fue quién atendió el caso, sin embargo, no es cierto que como causa probable esté especificada por él, la de "*No tener elementos de protección identificación y señalización*", puesto la que en realidad especificó el agente de tránsito corresponde a

la causa 308 del Manual de Diligenciamiento del Informe Policial de Accidente de Tránsito (Resolución No. 001268 de 2012 del Ministerio de Tránsito y Transporte), que es: *"Hipótesis atribuibles a la vía: 308. Otras. Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores."*

Por otro lado, es importante señalar que, de acuerdo al mismo informe, el sector por donde ocurrió el accidente es "Residencial", tenía condición "seca", iluminación artificial "Buena", eran altas horas de la noche (09:49 p.m.) y en el bosquejo señala que la motocicleta conducía por el carril izquierdo, por lo que puede inferirse una culpa exclusiva y determinante de la víctima

Adicionalmente, el IPAT por sí solo no se puede reputar como prueba, pues requiere de elementos materiales probatorios adicionales que respalden lo ahí enunciado. Ahora bien, no hay otros medios materiales probatorios que permitan cotejar lo suscrito ni mucho menos en el IPAT se señalaron testigos presenciales que pudieran ser citados a testificar por haber percibido las circunstancias de tiempo, modo y lugar el día y hora de los hechos.

CUARTO: No me consta, me atengo a la valoración probatoria que se haga de la historia clínica aportada.

QUINTO: No me consta, me atengo a la valoración probatoria que se haga de la historia clínica aportada.

SEXTO: No es cierto, el hecho sexto es una mera apreciación subjetiva del apoderado de la parte demandante, por cuanto la supuesta discapacidad a que hace alusión no ha sido calificada por la entidad competente, incluso lo reconoce en el relato de este hecho al afirmar que *"estamos estimando anticipadamente"*, un porcentaje que no puede ser presumido sin el lleno de requisitos necesarios para ser determinado legítimamente, técnicamente y de acuerdo a la ley, razón por la cual esa pérdida de capacidad laboral de un trece por ciento (13%) enunciada por la demandante, no deja de ser una simple especulación basada en suposiciones. En todo caso, cualquier liquidación de perjuicios que se realice por la parte demandante estará mal calculada hasta tanto no se realice teniendo en cuenta el porcentaje otorgado por las Juntas de Calificación de Invalidez

SÉPTIMO: No es cierto que el vehículo de tipo motocicleta de placas KTJ-07D, haya sufrido daños *"al punto de una pérdida total"*, pues de acuerdo al informe del accidente de tránsito relacionó en la descripción de daños materiales del vehículo solo *"rayones varios"*. Además, ni siquiera hay constancia en el expediente acerca de la inmovilización y conservación de la misma en los patios de la Secretaría de Movilidad, ni una prueba de la tasación de los daños presuntamente sufridos por motocicleta –si quiera sumaría– que acredite lo dicho. Adicionalmente, no se entiende la propietaria de la motocicleta no ha vuelto a tomar posesión de la misma para evitar su desgaste y el cobro del servicio de patios desde hace más de dos (2) años, lo que claramente demuestra la falta de ánimo para ejercer el *animus domini* del bien mueble, lo que es un hecho y una responsabilidad sólo atribuible al propietario del automotor.

OCTAVO: No me consta, es un hecho que no es del alcance de conocimiento de mi representada, adicionalmente no se demuestra nada de lo expresado por la parte demandante en cuanto a pruebas como contratos laborales, contratos de prestación de servicios, planillas de pago, afiliaciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, transferencias bancarias, certificaciones laborales, entre otros que den fe del presunto vínculo laboral, las presuntas actividades desempeñadas y/o el presunto salario u honorarios devengados.

Respecto al certificado de ingresos aportada por la contadora pública, se debe decir que por sí sola no es una prueba de lo dicho por la parte demandante puesto que según la Sentencia del Consejo de Estado del proceso de radicado No. 080012331000200600073401 del 14 de junio de 2018 C.P. Ramiro Pazos Guerrero se indica: *"(...) Con todo, esa certificación no es suficiente por sí misma para que el juez le otorgue plenos efectos probatorios, toda vez que, en cada caso, deberán indicarse o aportarse los respaldos que sirvieron de fundamento de la certificación extendida"*.

NOVENO: No me consta. En todo caso no es un hecho sino una especulación o apreciación personal, por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

DÉCIMO: No me consta puesto que no es un hecho que le corresponda conocer o haya conocido mi representada, previamente.

DÉCIMO PRIMERO: No me consta. En todo caso no es un hecho sino una especulación o apreciación personal, por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe en el proceso.

DÉCIMO SEGUNDO: Es cierto, el requisito de procedibilidad se agotó con el Distrito de Santiago de Cali y se expidió la Constancia de No Acuerdo. Sin embargo, es menester indicar que este requisito prejudicial no agotó con EMCALI EICE ESP, por cuanto no es demandado dentro de este asunto.

DÉCIMO TERCERO: Es cierto, de acuerdo con el poder que aporta al escrito de la demanda. Sin embargo, no prueba ninguna de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, simplemente da cuenta del ejercicio del derecho de postulación.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES Y CONDENAS:

Presento oposición a todas las pretensiones y condenas derivadas de perjuicios materiales y morales deprecadas por la parte demandante o demandada y que estén relacionadas directa o indirectamente con mi representada, la vinculada EMCALI EICE ESP, por cuanto no se presentaron pruebas conducentes, pertinentes y útiles que relacionen a mi representada con los hechos y que puedan serle objeto de imputación, lo cual da cuenta de la desatención de los demandantes a la exigencia probatoria contemplada en el artículo 167 del Código General del Proceso, en aplicación por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Además, dejo constancia que mi representada EMCALI EICE ESP, no ha sido llamada a conciliar por la parte demandante, lo cual se torna en un requisito de procedibilidad para el ejercicio del derecho de acción en los medios de

control consagrados en los artículos 138, 140 y 141 en concordancia con el numeral primero del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011). Por lo expresado, y debido a la nula posibilidad de prosperidad del medio de control incoado, solicito que se condene en costas a la parte demandante. Finalmente, se deja claridad que, a mi consideración, la tasación de los daños y perjuicios, no sólo no está soportada en dictámenes técnicos, médicos, laborales y facturas, sino que además la parte demandante no explica como llegó al cálculo de esas cuantías, máxime cuando ella misma reconoce que ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral de un trece por ciento (13%) que enunció fue propuesto por ella misma y no dictado por alguna Junta de Calificación de Invalidez, lo que claramente vicia cualquier tipo de liquidación de perjuicios de acuerdo a los topes indemnizatorios regulados en el Acta No. 28 de 2014 del Consejo de Estado.

III. EXCEPCIONES QUE PRESENTA EMCALI EICE ESP:

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho, no acceder a ninguna de las pretensiones o condenas que la parte actora reclama o llegare a reclamar respecto de EMCALI EICE ESP, y me opongo a cada una de ellas por los siguientes motivos y razones de derecho:

a) EXCEPCIONES PREVIAS:

1. Inepta demanda por falta de requisito formal al no haber agotado el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial administrativa en contra de EMCALI EICE ESP.

Se propone la excepción de inepta demanda por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial, teniendo en cuenta que no obra en el expediente constancia que acredite que se agotó este requisito frente a EMCALI EICE ESP. En ese sentido, se debe indicar que la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que constituye, a la vez, por mandato legal, requisito de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control consagrados en los artículos 138, 140 y 141 en concordancia con el numeral primero del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (ley 1437 de 2011).

Desde la entrada en vigencia de la Ley 23 de 1991, cuya esencia era la descongestión de los despachos judiciales, estaba intrínseco el discurso de la resolución pacífica de conflictos a través de la implementación de mecanismos tales como la mediación, la amigable composición, el arbitraje y la conciliación.

Por su parte, la Ley 446 de 1998 dedica en su Parte III, cinco capítulos a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, incluida la conciliación extrajudicial, cuyas normas recogen legislaciones anteriores, algunas de carácter transitorio, otras de orden procesal, pero todas ellas dirigidas a fortalecer la justicia alternativa y a facilitar cada vez más a los ciudadanos la posibilidad de prestar el servicio público de administrar justicia.

De otro lado, la Ley 640 de 2001 se propuso hacer más fácil el acceso de los colombianos a la conciliación y, en consecuencia, tiene un capítulo para tratar el tema de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo, como otro dedicado a establecer la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir a diferentes jurisdicciones, incluida la de lo contencioso administrativo.

La Ley 1285 del 2009, reformativa de la “Ley Estatutaria de la Administración de la Justicia”, dispuso en su artículo 13 la obligatoriedad de acudir a la conciliación como “requisito de procedibilidad” previo a iniciar una acción ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto quiere decir: que para iniciar cualquiera de las acciones contempladas en los artículos 138, 140 y 141 del Código Contencioso Administrativo, antes de presentar la demanda ante dicha jurisdicción se debe intentar previamente la conciliación; y, que la única instancia ante quien se debe promover la conciliación contencioso administrativa es ante la Procuraduría General de la Nación y esta no se agotó respecto de mi representada, sin darle derecho a revisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que pudiere llegar a tener incumbencia, para asimismo poder proponer una fórmula de arreglo, dado el caso.

El requisito de procedibilidad (Artículo 161 del C.P.A.C.A) relacionado con la conciliación extrajudicial, como presupuesto procesal que es, debe verificarse antes de la presentación de la respectiva demandada para el ejercicio de las acciones previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código, y, puesto que por disposición expresa de la Ley 1285, en sus artículos 13 y 28, y dado el carácter procesal de la norma respectiva, tal requisito entró a regir a partir de la respectiva promulgación.

Dicha función fue asignada a las Procuradurías Judiciales para Asuntos Administrativos bajo la coordinación de la Procuraduría delegada para la Conciliación, la cual bajo la disposición de la Ley 1367 de 2009, fue organizada dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación y de las funciones correspondientes.

Por lo anterior, solicito se declare probada la excepción de Inepta demanda por falta de requisito formal al no haber agotado el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial administrativa en contra de EMCALI EICE ESP.

2. Caducidad del medio de control de reparación directa respecto de EMCALI EICE ESP.

La caducidad es un fenómeno previsto por el legislador, fundamentado en la seguridad jurídica que debe imperar en nuestro ordenamiento, que tiene por finalidad evitar que situaciones frente a las cuales existe controversia permanezcan en el tiempo sin que sean definidas por un juez con competencia para ello. Es la sanción que consagra la ley por la falta de ejercicio oportuno del derecho de acción, de manera que, una vez excedidos los plazos preclusivos para acudir a la jurisdicción, se ve limitado el derecho que le asiste a toda persona para solicitar que le sea resuelto un conflicto por el aparato jurisdiccional del poder público. Así las cosas, es la propia ley la que asigna una carga a los ciudadanos para que, ante la materialización de un determinado hecho, actúen con diligencia en cuanto a la reclamación efectiva y oportuna de los derechos consagrados en las disposiciones jurídicas. Tal carga –la caducidad– no puede ser objeto de desconocimiento, modificación o alteración por las partes, dada su naturaleza de orden público.

En ese sentido, el numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contempla que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (02) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el caso concreto, se encuentra que los presuntos hechos objeto del medio de control, ocurrieron el día veintisiete (27) de septiembre del año 2018, fecha en que tuvo conocimiento de los hechos, por lo que la caducidad se debe contar a partir del día siguiente de la misma, esto es, el 26 de octubre de 2018. Así, la parte actora tenía en principio hasta el veintiocho (28) de septiembre del año 2020 para presentar la demanda.

Sin embargo, el Decreto 564 de 2020, dispuso en convergencia con los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que los términos de prescripción y de caducidad para ejercer derechos, acciones o presentar demandas ante la rama judicial o tribunales arbitrales se suspendieron desde el 16 de marzo hasta el día el 1 de julio de 2020, para un total de tres (03) meses y once (11) días hábiles. Así las cosas, me permito mencionar que EMCALI EICE ESP, hasta la fecha, no se ha presentado ninguna acción judicial en contra de mi representada por los hechos indicados, por lo tanto, solicito se declare probada la excepción de caducidad del medio de control con respecto a EMCALI EICE ESP, presentado por la parte demandada.

b) EXCEPCIONES DE MÉRITO:

1. Ausencia de pruebas que demuestren las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y falla del servicio no probada.

Es posible que le haya ocurrido un accidente a la señora Sandra Patricia Espinosa Mosquera, pero no existe certeza ni se prueba que fuera con causa de una alcantarilla que *"se encontraba demasiado alta al nivel de la calle"*.

Del informe de tránsito, no pueden probarse las circunstancias posibles o causas probables que habrían dado origen al accidente, pues en este sólo se hace mención a una observación que indica lo que la misma demandante afirma "ocasionó" el accidente, pero no obra la relación de ningún testigo que acredite lo sucedido, aun pese a que la dirección de los hechos es una zona de gran concurrencia por encontrarse allí un establecimiento de comercio licorera denominado "El Canario", circunstancia que el mismo informe de tránsito deja constancia al indicar en las características del lugar ser una zona residencial y comercial.

Inclusive en el acápite de la hipótesis del accidente establece la Número 308 del Manual de Diligenciamiento del Informe Policial de Accidente de Tránsito (Resolución No. 001268 de 2012 del Ministerio de Tránsito y Transporte), que es: *"Hipótesis atribuibles a la vía: 308. Otras. Se debe especificar cualquier causa diferente de las anteriores."*, de la que sin embargo no hace referencia a cuál fue, pese a que ese mismo manual establece que está debe ser especificada. Además, tampoco obra prueba dentro del proceso que determine que el accidente no tuvo origen en una infracción de la demandante, como

lo fuera Resolución de Secretaría de Movilidad que certificara la ausencia de responsabilidad de la parte demandante.

Por los anteriores motivos, es claro que siendo el IPAT el único elemento material probatorio para probar la existencia del accidente con ocasión de una presunta elevación de la alcantarilla, esta se torna insuficiente e inconducente para establecer la verdadera causa del accidente ocurrido a la señora Espinosa Mosquera.

Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en Sentencia del 29 de febrero de 2012, señala:

*“El actor sufrió un accidente por culpa de una alcantarilla que se encontraba levantada en el tramo correspondiente a la calle 134 a la altura de la carrera 25, sitio donde además no existía ninguna señal de precaución, lo cual le impidió maniobrar para evitarla y al sobrepasarla su vehículo se golpeó y perdió el control del mismo. Analizado el acervo probatorio se evidencia que se acreditó la ocurrencia del accidente con el informe elaborado por el funcionario de tránsito y también que legalmente su ocurrencia del mismo no tuvo origen en una infracción cometida por quien conducía el vehículo, tal como fue reconocido mediante la Resolución proferida por la Secretaría de Tránsito, en la cual se absolvió de responsabilidad al actor, **pero estas pruebas no aportan claridad alguna acerca de las circunstancias que dieron origen al accidente.** (...) en el informe del accidente aportado al proceso se consignó lo manifestado por el conductor acerca de las causas del accidente, pero no hubo indicación alguna por parte de quien signó dicho documento, diferente de dejar sentada las direcciones de quienes presenciaron los hechos, los cuales fueron citados al proceso, pero no se logró recaudar su testimonio. Adicionalmente, sobre el estado de la vía y su falta de señalización, sólo se allegó un video, que no puede ser valorado como plena prueba, porque no se tiene certeza sobre el momento en que fue grabado y si la circunstancia allí indicada existía al momento de los hechos, de modo que el mal estado de la vía y la falta de señalización no fueron probadas plenamente en el proceso, carga procesal que radicaba en cabeza del demandante, ya que el régimen aplicable como se indicó es el de la falla del servicio. (Negrita y cursiva fuera del texto)*

En el mismo sentido, en semejanza a la jurisprudencia citada, para el presente asunto la parte actora aporta fotografías del “supuesto” día de la ocurrencia de los hechos, circunstancia que tampoco es acreditada, puesto que dichas fotografías no cuentan ni con la nitidez suficiente para determinar que existía un desnivel en la alcantarilla, como tampoco se encuentran debidamente cotejadas sobre la hora, fecha y obtención de estas. En consecuencia, se tiene que la parte actora no demuestra siquiera que su accidente haya sido con ocasión a una supuesta elevación de la alcantarilla al nivel de la vía.

Ni del informe de tránsito, ni de las fotografías se puede inferir actual o probable a EMCALI EICE, puesto que no aporta mayores datos o testimonios que corroboren la observación a la que se hace referencia y que solo se traduce a una manifestación de la propia demandante, como tampoco dentro de la demanda aporta prueba testimonial diferente a la del propio agente de tránsito que suscribió el informe.

En sentencia del 8 de noviembre de 2020⁶, la Sección Tercera del Consejo de Estado ratificó las subreglas estructuradas en torno a la valoración del material fotográfico en los siguientes términos:

(...) Sin embargo, no existe certeza acerca de las condiciones de tiempo en las que fueron tomadas, toda vez que, si bien todas tienen registrada la fecha del "25/11/2003 11:30 am", no es menos cierto que no se aportaron elementos que permitan determinar si dicha fecha es aquella en la que se tomaron o en la cual se imprimieron.

Respecto del valor probatorio de las fotografías, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha precisado:

El valor probatorio de las fotografías y los que con ellas se documentan. El material fotográfico, como medio de prueba, se enlista dentro de las denominadas documentales y, en tanto documento, reviste de un "carácter representativo, que demuestra un hecho distinto a él mismo"⁷. De ahí que, "[l]as fotografías por sí solas no acreditan que la imagen capturada corresponda a los hechos que pretenden probarse", con lo cual, el valor probatorio que puedan tener "no dependen únicamente de su autenticidad formal, sino de la posibilidad de establecer si la imagen representa la realidad de los hechos que se aducen o atribuyen, y no otros diferentes, posiblemente variados por el tiempo, el lugar o el cambio de posición".

12.1. En otras palabras, para que las fotografías tengan connotación probatoria y puedan ser valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, se debe tener certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron tomadas⁸, lo que normalmente se devela a través de otros medios complementarios. De esta forma, la autonomía demostrativa de dichos documentos se reduce en la medida que se requieran otros medios de convicción que las soporten⁹.

Como en este asunto no existe certeza sobre las condiciones de tiempo en las que se tomaron las fotografías, la Sala concluye que carecen de mérito probatorio para probar, por sí mismas, el estado de las escaleras para el momento de los hechos, razón por la cual, para tal fin la Sala se remitirá a los demás elementos obrantes en el plenario(...).

En jurisprudencia del Consejo de Estado, es reiterativa la posición sobre la valoración de las pruebas que consten de las supuestas fallas del servicio, en Sentencia del 30 de octubre de 2013, por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación se precisó:

"De modo que el informe de accidente al que se hace mención pese a su calidad de documento público y de prueba técnica, resulta débil en cuanto realizado con base en suposiciones, pues el agente estatal que lo elaboró no estuvo presente, ni consultó a los testigos siendo insuficiente su reconstrucción a partir de huellas, señales y partes de los vehículos, entre otros hallazgos. Siendo preocupante que no dejara consignado lo dicho por el testigo cuya presencia fue reconocida por los agentes de la Fiscalía en el acta de levantamiento de cadáver."

De lo anterior se tiene que, al tratarse de la supuesta falla del servicio, es la parte interesada, quien debe aportar las pruebas idóneas que corroboren la misma por incumbirle en los efectos jurídicos de las normas, pues es ese el objetivo de las mismas. Y que del informe de tránsito pese a ser un documento público técnico, no debe dejarse la idoneidad del mismo como prueba atendiendo los criterios de la sana crítica.

"Como quedó expuesto con la jurisprudencia transcrita, las reglas de la sana crítica permiten al fallador, en ejercicio de su autonomía, decidir el peso que dé a cada una de las pruebas presentadas para sustentar los hechos, sin que ello comporte un ejercicio arbitrario, pues, en todo caso, se habrá de sustentar su experiencia y raciocinio en el ordenamiento. Sin tener que sujetarse a reglas fijas sobre el valor de cada medio, aunque con respeto de los principios constitucionales, particularmente las facultades de audiencia y contradicción de las partes." (Ibidem).

En sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 9 de julio de 2018, sobre la necesidad de demostrar que el daño es con ocasión de la falla del servicio a efectos de determinar la responsabilidad de la administración, señaló:

"De manera que, para imputar responsabilidad extracontractual del Estado bajo el título de falla en el servicio, es necesario demostrar el daño causado con ocasión de las deficiencias y omisiones en las que la entidad estatal incurrió y, en consecuencia, acreditar que la entidad del Estado incumplió con los deberes jurídicos que le correspondían de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente para la época de ocurrencia de los hechos objeto de demanda."

En conclusión, la demandante no logra demostrar la supuesta falla del servicio como origen del accidente que sufrió y en consecuencia del daño ocasionado, por cuanto el informe técnico de tránsito se torna deficiente e inconducente para el establecimiento de la causa del accidente, así como el supuesto registro fotográfico tampoco da cabida a determinar la fecha y hora en que fueron tomadas. Del mismo modo, tampoco se excluye que el accidente haya sido causado como consecuencia del incumplimiento de la señalización vial que se encontraba en el lugar de los hechos.

En consecuencia, deben negarse las pretensiones de la demanda, ante el incumplimiento de la carga probatoria por parte del apoderado de la parte actora, consagrada en el artículo 167 del Código General del Proceso, norma que dispone: *"Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen"*.

Por tanto, solicito que se declare probada la presente excepción respecto de EMCALI EICE ESP.

2. Culpa exclusiva y determinante de la víctima como eximente de responsabilidad.

En la dirección de los hechos, precisamente sobre la Carrera 2, sobre la cual venía transitando la demandante, existía una señalización preventiva vertical peatonal, y horizontal, que indica poner en alerta al conductor, de tal modo que esta sería suficiente para que el conductor en el deber de cuidado sobre una actividad de riesgo, tomara

la medida necesaria de reducción de velocidad, lo que habría evitado el accidente de la señora Espinosa Mosquera.

“Debe plantearse un juicio de imputación en el que, demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba encuadrarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede encuadrar en la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder hacer su encuadramiento en la falla en el servicio, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional.” (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C del 9 de julio de 2018.)

La actividad peligrosa es aquella en la que la persona no actúa con sus fuerzas comunes sino a través de cosas, aparatos, animales, que aumentan la fuerza común, generando un mayor riesgo de daño a los demás, tal y como ocurre con la conducción de vehículos automotores.

La Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil, de fecha 26 de agosto de 2010, Magistrada ponente Dra. Ruth Marina Díaz Rueda, manifestó:

“Lo anterior es demostrativo, se reitera, de que no es el mero daño que se produce ni el riesgo que se origina por el despliegue de una conducta calificada como actividad peligrosa la que es fuente de la responsabilidad civil extracontractual de indemnizar a quien resulte perjudicado, sino que es la presunción rotunda de haber obrado, en el ejercicio de un comportamiento de dichas características con malicia, negligencia, desatención incuria, estos es, con la imprevisión que comporta de por sí la culpa.”

Así las cosas, la presente excepción versa sobre el rompimiento del nexo causal entre el obrar de EMCALI EICE ESP y el daño causado al demandante, sobre la base de que el actor se expuso al riesgo:

a) Al conducir a una velocidad no permitida, toda vez que en dicha vía, la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora, ya que de ir a la velocidad normal indicada y al observar un posible obstáculo, habría podido evitarlo, situación que no se produjo, como quiere que del relato de los hechos se advierte que “perdió estabilidad” y de acuerdo con el croquis del informe de tránsito que la misma parte actora aporta esta salió arrastrada a una distancia de aproximadamente 6.90mts y en consecuencia puso en peligro su propia vida.

Por otra parte, el código Nacional de Tránsito Terrestre, Ley 769 de 2000, determina:

“Artículo 55: COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR, PASAJERO O PEATON. Toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse

de forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito."

El artículo 94 del Código Nacional de Tránsito, establece sobre las obligaciones de los motociclistas lo siguiente:

"Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

- *Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.*
- *Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa.*
- *Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro.*
- *No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario.*
- *No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías en donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello.*
- **Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad.**
- *No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar.*
- *Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código.*
- *Los conductores y los acompañantes cuando hubiere, deberán utilizar casco de seguridad, de acuerdo como fije el Ministerio de Transporte.*
- *La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del vehículo." (Negrilla y cursiva fuera del texto)*

En ese orden de ideas, es preciso advertir que la causa que produjo las lesiones a la señora SANDRA ESPINOSA fue la conducta culposa de ella misma, quien, en ejercicio de una actividad peligrosa como lo es conducir una motocicleta, transgredió el ordenamiento legal produciéndose el resultado dañoso, pues quebrantó las normas de tránsito al circular presuntamente fuera de los lineamientos permitidos por la ley.

La culpa exclusiva de la víctima constituye uno de los elementos de la causa extraña que exonera de responsabilidad a quien en principio se reputa culpable, en tanto rompe el nexo de causalidad que vincula al presunto victimario y a la víctima, pues se concluye que ésta última producto de su actuar culposos ha sido la causa exclusiva, eficiente y determinante del daño. En otras palabras, ésta figura señala que ha sido exclusivamente el actuar culposos de la propia víctima el que ha generado el daño y por tanto no puede imputársele responsabilidad a ninguna otra persona.

En el caso que nos ocupa, pese a la precaria masa probatoria, se infiere que el accidente de tránsito en el que se vio en vuelta la demandante y que derivó en las lesiones sufridas, tuvo origen en la conducción imprudente o imperita de la víctima, y en la omisión del cumplimiento de las normas de tránsito, pues el informe de tránsito aportado solo vincula la manifestación propia de la demandante, carente de testimonios y pruebas que así lo soporten, lo que si indica es que efectivamente la señora Sandra Espinosa venía conduciendo fuera del límite de velocidad permitido para esta vía y sin atención de las señales de tránsito que allí concurrían e incumpliendo el Código de Tránsito, circunstancia fáctica de la que es posible advertir que la víctima incumplía en el momento del siniestro la norma de tránsito prevista en el Código Nacional de Tránsito relativa al tránsito de motocicletas, situación que hizo exacerbar más allá de lo permitido el estado del riesgo del ejercicio de una actividad peligrosa, más aún en tratándose de la conducción de un vehículo como el accidentado, de lo cual es posible concluir la culpa exclusiva de la víctima.

La primera responde a no acatar las señales de tránsito que había en el lugar por cuanto seguido de la alcantarilla a que se hace alusión, había señalización peatonal que indica que el conductor debe reducir su velocidad, Así como la señalización horizontal de peatón. Señalización toda, que era visible y que del lugar de los hechos contaba con iluminación artificial buena como consta en el informe de tránsito, motivo por el cual la demandante vio con claridad y aún así omitió.

Luego al exceso de velocidad, teniendo en cuenta que el artículo 106 de la norma precitada, fija como límite máximo de velocidad en las zonas residenciales: 30 kilómetros por hora, que en todo caso disminuye dependiendo de las condiciones y señalización de la vía, y que se presume por cuanto de haber llevado la velocidad reglamentaria habría podido detenerse a tiempo o sobrepasarlo sin dificultad de haber existido dicho desnivel.

Es bien sabido en este último caso que los límites de velocidad están fijados de tal manera que le permita al conductor reaccionar ante cualquier imprevisto en la conducción, de tal manera que el riesgo en dicha actividad se reduzca al mínimo, de tal forma que la desatención de dicha norma puede conllevar inevitablemente a la fatalidad, máxime si se trata de conducción de vehículos que por sus características, como las motocicletas no ofrezcan protección al conductor, razón por la que éste debe extremar la precaución al momento de desarrollar dicha actividad.

Si en efecto la víctima al encontrar el desnivel en la alcantarilla, cosa que no está probada, perdió el control de su vehículo, se infiere a partir de los hechos descritos en la demanda que la actora transitaba con exceso de velocidad. Situación que se presume a partir de dos razones:

i) El accidente ocurrió a las 21:49 y según da cuenta el informe de tránsito la vía contaba con iluminación artificial en buen estado, con lo cual la visibilidad no era reducida, de manera que si la alcantarilla tenía un desnivel que señala la contraparte el conductor hubiera podido advertirla con suficiente anticipación, salvo que condujera a una velocidad superior a la permitida, caso en el cual el presunto obstáculo habría aparecido intempestivamente reduciendo severamente la capacidad de reacción.

ii) La víctima presuntamente pierde el control del vehículo al encontrarse con la alcantarilla, de lo cual se infiere también el exceso de velocidad, pues ello supone que la capacidad de reacción se redujo al máximo y que no fue posible detener el vehículo en tiempo o reducir la velocidad para sortear el obstáculo con tiempo suficiente situación que solo se explica por la alta velocidad.

iii) La señalización de la zona acentuaba aún más el deber de reducción de velocidad del demandante, que le hubiera permitido - de haber obrado conforme a la ley en atención a una actividad de riesgo - detener el vehículo o eludir el obstáculo.

Con lo que cabe concluir que la desatención de las normas de tránsito por la víctima y que se infiere de los hechos de la demanda, se constituyó en la causa eficiente, exclusiva y determinante del daño pues de otra manera habría logrado reaccionar y prever el riesgo en el que ella misma con su actuar quedo expuesta.

Finalmente, en el bosquejo del IPAT, el agente de tránsito Carlos Arévalo, señaló que la presunta alcantarilla se encontraba en la mitad del carril izquierdo de la vía. Esto lleva a la conclusión que la señora Espinosa se desplazaba en un carril indebido, tal como lo señala el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito:

Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo."

El comportamiento de la señora Espinosa Mosquera fue decisivo, determinante y exclusivo, pues en primera instancia, fue ella quien propició las condiciones pertinentes al asumir voluntariamente el riesgo que conlleva una actividad como la conducción de motocicletas. No puede ser de cargo de la administración cuando la conducta de la demandante fue la causa cierta y eficaz para la producción de su propio daño, tal como lo ha exigido la alta corporación de lo contencioso administrativo en materia de exoneración de responsabilidad administrativa:

(...) en materia Contencioso Administrativa, para la determinación de la responsabilidad de la parte demandada, reviste especial importancia el análisis de facto y jurídico del comportamiento de la víctima en la producción de los hechos, con miras a establecer -de conformidad con el grado, importancia, eficacia, previsibilidad, irresistibilidad, entre otros aspectos de esa conducta - si hay lugar a la exoneración del ente acusado -hecho exclusivo de la víctima - o a la disminución del quantum de la indemnización en el evento en que se presente la concurrencia de culpas. (...) (C. E. Sec. Tercera, Sent. Exp. 23.710, may. 14/2012, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.)

Todo lleva a concluir que si la víctima es quien se expone a sufrir su propio daño, debe asumir las consecuencias de su comportamiento y no atribuir a otra entidad responsabilidad sin fundamento. Por esto, solicito respetuosamente se despache desfavorablemente la totalidad de las pretensiones del demandante y se declare el eximente de responsabilidad propuesto.

3. Exagerada e indebida tasación de perjuicios:

Como se explicó en líneas anteriores, sin aceptar responsabilidad alguna teniendo en cuenta las profundas deficiencias probatorias, se debe decir que la tasación de los perjuicios materiales y morales no obedece a un sustento probatorio que fehacientemente indique el perjuicio exacto en que incurrieron los demandantes. Como se explicó, el juzgador no está obligado a reconocer pretensiones indemnizatorias que no estén claramente acreditadas y tasadas porque no puede presumirlas y se debe atener a lo allegado oportunamente y probado en el proceso; y adicionalmente atender al precedente jurisprudencial.

En ese sentido, se presume por la parte demandante un 13% de pérdida de capacidad laboral de la víctima que no ha sido constatado por la autoridad competente, lo cual evidentemente va a hacer variar la tasación de la liquidación presentada por la parte demandante. Además, también es claro que esta no presentó ninguna certificación o dictamen de porcentaje de pérdida de capacidad laboral que pueda valorar también condiciones preexistentes de la víctima.

En ese sentido, si bien la tasación de los perjuicios inmateriales obedece al *arbitrium judicis* por lo que es el criterio del juez de acuerdo a los principios de la sana crítica lo que permite determinar en caso de una sentencia condenatoria cuanto es el monto a pagar por concepto de perjuicios morales, a nivel jurisprudencia y con aras de salvaguardar los derechos a la igualdad y la seguridad jurídica se han fijado unos montos para que sirvan como criterios a los falladores a la hora de reconocer dichos rubros, los cuales no han sido tomados en cuenta por la parte demandante; por lo tanto se solicita declarar probada esta excepción.

4. Inexistencia de responsabilidad por parte de EMCALI EICE ESP, rompimiento del nexo de causalidad y falta de imputación.

Frente al caso en particular y debido a que la parte demandante no logra demostrar ninguno de los elementos requeridos e indispensables para demostrar la responsabilidad en el caso de estudio como lo son: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador, máxime cuando EMCALI EICE ESP ni siquiera fue demandada en el presente proceso, por lo cual no se puede presumir su responsabilidad o imputársele acción u omisión alguna que permitiera derivar un nexo causal entre este y el daño y perjuicio ocurrido. Es por todo lo anterior que no puede imputarse responsabilidad a mi representada toda vez que no se le ha demostrado la obligación incumplida.

5. Reducción del monto de concurrencia de culpas

En el caso eventual en el que usted, señora Juez, decida no acoger los planteamientos expuestos anteriormente, de manera subsidiaria solicito se sirva declarar la concurrencia de culpas como lo establece el artículo 2357 del Código Civil: "*La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él el imprudentemente*".

Por lo que, en caso de que se llegue a probar alguna imprudencia parte demandante, que tenga incidencia causal en los daños alegados, deberá el Despacho ordenar una notable reducción en el monto indemnizable, en tanto la tasación que se efectúe se realizará de acuerdo al grado de responsabilidad de cada una de las partes.

6. Enriquecimiento sin causa:

Es imposible imponer una condena y ordenar el resarcimiento de un detrimento por perjuicios no demostrados o presuntos, o si se carece de la comprobación de su magnitud y realización, ya que no es admisible la presunción en esa materia, de manera que una indemnización sin fundamentos fácticos ni jurídicos necesariamente se traducirá en un lucro indebido, como sucedería en un caso como el presente

IV. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito aparte solicitaré la vinculación de la empresa ALLIANZ SEGUROS S.A para amparar las obligaciones que resultaren en el presente trámite en contra de mi representado y a favor del demandado, teniendo en cuenta el contrato de póliza de seguros celebrado entre EMCALI EICE ESP y ALLIANZ SEGUROS S.A. No. RCE No. 22336221 de 2018 cuya vigencia estuvo comprendida entre el día 21/09/2018 y el 20/09/2019.

V. OPOSICIÓN A LOS MEDIOS DE PRUEBA

1. Frente a la prueba documental denominada “Fotografías del lugar de los hechos para el día de ocurrencia”:

En relación con las fotografías que la parte demandante allegó con la demanda y que pretenden demostrar las condiciones en que se encontraba el lugar donde ocurrió el hecho, no se debe otorgar valoración alguna, pues carecen de mérito probatorio, en principio, puesto que solo dan cuenta del registro de varias imágenes, sobre las cuales no es posible determinar su origen, ni el lugar, ni la época en que fueron captadas, y al carecer de reconocimiento o ratificación no pueden ser cotejadas con otros medios de prueba allegados al proceso, además que carecen de nitidez suficiente para garantizar una valoración idónea.

Para esta parte de la litis no es clara la representación de la realidad de los hechos que se pretende demostrar con los mencionados documentos representativos, pues genera la duda sobre la fecha de su toma, si fue en la dirección a que hace alusión el demandante y por supuesto, su contenido, el cual puede ser alterado si no se conserva su custodia, aunado a que no hay forma de determinar su origen y creador.

Nuevamente, con la ausencia de medios probatorios que den cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, se le debe restar valor probatorio a las allegadas

fotografías, en el entendido que lo que se pretende representar genera incertidumbre sobre la relación con los hechos realmente materializados.

B. Frente a la prueba documental denominada “recibos de transporte”

Es claro que carece esta prueba de uno de sus requisitos para que sea válida es la autenticidad. Se aportan al proceso “Recibo de caja menor” sobre una supuesta prestación de servicio de transporte, pero estos carecen de firma o alguna forma de autenticidad. Mal podría generar convencimiento al juez un documento del que no se sabe con certeza quien es su autor.

Es indispensable que el documento se encuentre firmado por la persona que lo suscribió, pues el que suscribe no solo aprueba y hace suyo lo que en el escrito se contiene, sino que pone un signo visible y reconocible, el cual demuestra que el emana de él y que está conforme con sus intenciones. Sin firma *“el escrito puede ser un proyecto de documento, un borrador, pero nunca el documento porque nadie lo ha aprobado ni lo ha hecho propio”*²⁵.

La firma es requisito indispensable para que un documento tenga valor probatorio, ya que, sin ella, salvo aceptación expresa de la parte o de sus causahabientes, no podrá establecerse con certeza la autoría, esto es, su autenticidad siendo necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 826 del Código de Comercio la firma es: *“la expresión del nombre del suscriptor o de alguno de los elementos que la integren o de un signo o símbolo empleado como medio de identificación personal”*.

Frente a documentos privados presuntamente emanados de terceros no basta ni es suficiente la simple afirmación del aportante del documento, como quiera que ninguna disposición en el ordenamiento jurídico colombiano habilita presumir el acto rogatorio, el cual necesariamente debe ser acreditado.

En ese orden de ideas respetuosamente solicito no tener en cuenta este documento al carecer de autenticidad que le otorgue valor probatorio.

VI. PRUEBAS:

a) Documentales:

1. Contrato de póliza de seguros celebrado entre EMCALI EICE ESP y ALLIANZ SEGUROS S.A. No. RCE No. 22336221 de 2018.
2. Manual de Diligenciamiento del Informe Policial de Accidente de Tránsito (Resolución No. 001268 de 2012 del Ministerio de Tránsito y Transporte.

b) Testimoniales:

1. Solicito señor juez, citar a la señora Sandra Patricia Espinosa para realizar interrogatorio de parte sobre los hechos de la demanda, cuestionario que presentaré el día de la diligencia.
2. Solicito señor juez, citar al señor Agente de Tránsito Carlos Arévalo, de placa No. 409, adscrito a la Secretaría de Movilidad De Santiago De Cali, ubicada en la Carrera 3ª. No. 56-90 y quien suscribe el IPAT del hecho objeto del presente medio de control, quien puede ubicársele en Cali-Valle-por intermedio de la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali, librándose el correspondiente oficio por ser un funcionario público y auxiliar de la Justicia-Policía Judicial, para realizar interrogatorio de parte sobre los hechos de la demanda, cuestionario que presentaré el día de la diligencia.

c) Ratificación de documentos:

Teniendo en cuenta que la apoderada accionante aportó un documento diligenciado por la señora **ELIZABETH LONDOÑO DELGADO**, contadora pública, esta parte de la litis solicita ratificar su contenido, de acuerdo con el artículo 262 del CGP: *"Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación"*.

Dicha solicitud se realiza en tanto este documento no cuenta con el soporte de lo allí declarado, como lo es el contrato laboral que aduce, planillas de pago, transferencias o cualquier otro documento que demuestre el vínculo laboral y el salario devengado por la señora Espinosa Mosquera, puesto que existe ausencia de documentos que respalden la certificación y el mentado documento aportado no es suficiente para otorgarle plenos efectos probatorios, de acuerdo a la Jurisprudencia presentada.

De acuerdo con el mencionado documento, la señora Londoño Delgado puede ser citada en la carrera 64 No. 9 – 05, barrio Limonar de Cali y/o teléfono 512-0452.

VII. NOTIFICACIONES

Tanto el suscrito como EMCALI EICE ESP, las recibirá en la dirección Avenida 2 Norte #10 - 70. CAM Cali - Valle del Cauca, correo electrónico notificaciones@emcali.com.co

Cordialmente,



JOSÉ RAMIRO SANDOVAL MOSQUERA

Apoderado de la parte demandada.